



*Panamá:
de lo real y lo nacional en la
crisis en que andamos**

Guillermo Castro Herrera

1. Del lenguaje como síntoma

En Panamá, según estadísticas recientes, existen alrededor de 780 mil personas en edad de trabajar. De entre ellas, 300 mil son trabajadores asalariados con algún grado de organización. Otros 300 mil integran ese mundo rural y urbano llamado de la «economía informal», en el que el desempleo se combina con las más diversas estrategias de sobrevivencia, incluidas las de la intelectualidad de capas medias. Otros 180 mil, por último, son propietarios de medios de producción chiquitos, medianos, grandes y muy grandes. Estos muy grandes son en realidad muy pocos: se trata de apenas de 121 personas que, de acuerdo con un estudio de los economistas William Hughes e Iván Quintero, conforman un grupo que controla un capital de mil millones de dólares y realiza operaciones anuales por el orden de los tres mil millones, a través de una red de bancos, aseguradoras y otras empresas que monopolizan lo fundamental del comercio,

* Panamá. 24 octubre 1987.

la industria y la agricultura de la nación. Esto, en un país cuyo producto interno bruto anual se sitúa en el orden de los 4 mil 500 millones de dólares, significa que esos 121 propietarios controlan 3 de cada 4 de los dólares en los que cabe expresar la riqueza producida por el trabajo de mucho más de medio millón de panameños.

Sin embargo, un sector importante de esos trabajadores y de esa masa de pequeños y medianos propietarios, ni piensa ni actúa de acuerdo con sus condiciones materiales de vida, sino que identifica como propios los intereses de ese pequeño grupo al que Hughes y Quintero han llamado con toda razón los «dueños de Panamá». Este fenómeno, en el que la ideología de la clase dominante se convierte en ideología dominante para la sociedad entera, se expresa justamente en las formas de lenguaje con que esa sociedad razona sus problemas en busca de solución para ellos.

El control de los medios de producción material, en efecto, se traduce en el control de los medios de producción espiritual, esto es, de los Aparatos Ideológicos del Estado de cosas existentes, dentro del cual ocupan lugar destacado los medios de comunicación social y las instituciones educativas y religiosas a cuyo cargo corre la conformación del llamado «sentido común» -esto es, de los mecanismos espontáneos de la identificación de las apariencias con las realidades- y de los lenguajes más aptos para expresarlo. En el caso de nuestro país, y en particular durante los años de Reagan, ese «sentido común» y esos lenguajes se han venido expresando a través de algunos rasgos característicos de la verdadera naturaleza del imperio a cuyo servicio vive y se desvive la oligarquía panameña.

Uno de esos rasgos es el carácter estrechamente localista -aldeano, para utilizar la expresión de Martí- de la visión de lo real que anima a ese lenguaje; otro, su carácter ahistórico y otro, finalmente, su inmovilismo. Lo aldeano se expresa en el empeño de reducir lo real de la crisis que vive la Nación a un problema puramente local de confrontación entre grupos de interés político o, en el mejor de los casos, vagamente económicos, que guarda-

rían una relación esencialmente voluntaria con factores externos como el imperialismo norteamericano o las realidades de la región latinoamericana de la que hacemos parte indisoluble. El carácter ahistórico de ese sentido común y sus lenguajes se expresa en el hecho de que la inmensa mayor parte de los planteamientos que la cultura dominante hace sobre la crisis que vivimos, sus orígenes y sus perspectivas, dan por natural el orden social y económico en que esa crisis tiene lugar, y reducen por tanto el análisis de las soluciones posibles al mero rejuego político de posibilidades de cambio en el equilibrio entre los factores que constituyen el poder que realmente impera en ese orden.

El tercer rasgo del que hablamos, el inmovilismo, lleva a los protagonistas sociales de la crisis, por su voluntad o contra ella, a verbalizar sus criterios mediante el uso de un sistema muy limitado de categorías organizadas en pares antinómicos simples -llámese gobierno y oposición, corrupción y honestidad, opresión y libertad, militarismo y civilismo-, cuyo uso reafirma la supuesta naturalidad del orden existente y oscurece así la posibilidad de su análisis crítico. Así, al analizar el lenguaje como síntoma de la crisis que vivimos, nos encontramos con que, por virtud del poder realmente existente en nuestra sociedad, la inmensa mayor parte de los panameños se ve en la situación de discutir los problemas de hoy con los lenguajes de ayer, en busca de las soluciones que requiere nuestro mañana. Esto, en el marco de una situación de dependencia tan estrecha como la que vivimos, nos conduciría a afirmar además que lo brutalmente reaccionario y mezquino de ese lenguaje se ha agudizado a lo largo de estos años en que la oligarquía panameña encontró en Ronald Reagan un líder en cuyas características de incultura, amoralidad y codicia podía finalmente reconocerse y sentirse adecuadamente representada.

Como vemos, el análisis de la crisis a través de los lenguajes en que se expresan las formas de conciencia dominantes en nuestra sociedad, confirma lo observado por el historiador francés Le Goff cuando, en su estudio sobre «El vocabulario de las categorías sociales en San

Francisco de Asís y sus biógrafos del siglo XIII», indica que:

«Si el vocabulario es un instrumento en manos de los hombres y de las sociedades, es también una estructura que se les impone y que, más allá de su propia inelasticidad, les impone a los hombres la resistencia de las infraestructuras».

2. De la crisis como realidad social e histórica

Lo real en Panamá es hoy, sin embargo, una crisis que escapa a las posibilidades de explicación del sentido común dominante y que, por lo mismo, requiere para su análisis del empleo de un pensamiento y un lenguaje críticos, esto es, capaces de desaralar las expresiones cómodas del lenguaje dominante a través de la historización de los hechos a los que se quiere aludir. Aquí es justo, por ejemplo, empezar por reconocer que los factores externos que actúan sobre una sociedad determinada lo hacen a través, y en función de, las realidades internas que la caracterizan. Pero esta observación debe ser complementada con la de que, desde que a mediados del siglo pasado el capitalismo incorporó el conjunto de la humanidad en un mercado mundial único y creó con ello la posibilidad de hablar de una historia universal, esta relación entre lo interno y lo externo se ha hecho cada vez más compleja e interdependiente para todas las sociedades que hacen parte de esa historia.

Es ese sistema de dominación, surgido a fines del siglo XIX y llevado hasta sus consecuencias más extremas de explotación y saqueo universales bajo la hegemonía norteamericana que lo caracteriza desde la II Guerra Mundial, el que hoy ha entrado en lo que ya parece ser una crisis decisiva. Nuestro país, como todos los de América Latina, no puede ser entendido al margen de esa realidad histórica, que para nosotros se concretó en la consolidación de un modelo transitista de desarrollo, cuya incapacidad para dar respuesta a las necesidades fundamentales de nuestras grandes mayorías nacionales, está en la raíz de la crisis actual, por más que el localismo oligárquico se empeñe en desconocerlo y en hacerlo desconocer.

Nuestra crisis, en efecto, constituye un eslabón en la cadena de la crisis general del sistema imperialista de dominación, en cuyo seno se desarrollaron los capitalismo dependientes latinoamericanos y sus respectivas formaciones estatales y nacionales. El hecho de que la forma de expresión de la crisis en cada país adopte modalidades distintas no alcanza, en efecto, a ocultar que en cada uno de ellos esa crisis se desarrolla a través de una agudización de la lucha de clases que constituye su forma concreta de existencia como naciones. Esas formas abarcan desde la continuidad democrática en Venezuela hasta el totalitarismo en Chile; desde la guerra revolucionaria en El Salvador hasta la agresión contrarrevolucionaria de que es víctima Nicaragua. Ellas incluyen, por supuesto, las formas que adopta la crisis en Panamá, donde la intervención del imperialismo atiza en favor de sus propósitos de dominación los conflictos derivados de un divorcio cada vez más profundo entre gobernantes y gobernados que es, a su vez, expresión mediatizada por lo político de una contradicción ya inconciliable entre explotados y explotadores.

Esas diversas formas de expresión de la crisis, derivadas de trayectorias históricas particulares a cada país, expresan a su vez un problema común: el de la resistencia creciente de las mayorías sociales en cada una de nuestras naciones frente a la necesidad del capitalismo transnacional de dismantelar los Estados nacionales, en tanto éstos siguen siendo la expresión (desigual y problemática) de las contradicciones internas de sus respectivas sociedades y no sólo los dóciles instrumentos de un capital transnacional cada vez más desvinculado de las necesidades humanas y sociales más elementales. Porque es ése, y no otro, el significado político del chantaje económico desplegado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a cuenta del pago de una deuda externa reconocida por todos como impagable.

El eco que ese chantaje encontró en los gobiernos panameños desde fines de la década de 1970 constituye, si duda, uno de los factores fundamentales en el origen de la crisis actual. Ese eco, en efecto, contribuyó a la

culminación de un proceso político de vasto alcance que, en esa década, llevó hasta sus últimos límites las posibilidades de desarrollo de la sociedad panameña en el marco del capitalismo dependiente de orientación transitista, para retroceder ante ese límite cuando se hizo evidente que, para superarlo, era necesario poner en cuestión las bases sobre las que se afirma el poder de los dueños de Panamá. Para llegar a ese límite, sin embargo, fue necesario en su momento ampliar en una medida significativa derechos sociales y políticos de importantes sectores populares, que ganaron con ello el acceso a formas nuevas y crecientemente complejas de desarrollo de su conciencia y su capacidad de organización. El retroceso impuesto por nuestra situación capitalista dependiente bajo el chantaje de los organismos financieros internacionales significó, a su vez, la imposición de recortes a esos derechos -expresados con particular claridad en las reformas al Código del Trabajo y las restricciones a la participación popular en la gestión política estatal-, pero encontró a su vez sectores populares que ya no estaban dispuestos a aceptar pasivamente menos, porque sabían que tenían derecho a mucho más.

Es bueno recordar, en este sentido, que son dos -y no una- las vertientes de donde mana en Panamá el cuestionamiento a los regímenes surgidos de la llamada «transición democrática» instaurada en nuestro país desde fines de los años 70 como corolario interno a la firma de los Tratados Torrijos-Carter. De ambas, la más conocida -por ser sin duda la más divulgada- es la que corresponde a los intereses de la oligarquía panameña aliada al imperialismo norteamericano. Esa vertiente es la que cuestiona la lentitud y las irregularidades jurídicas de un proceso de transición percibido sobre todo como una oportunidad dorada para la restauración de la hegemonía política oligárquica sobre el Estado nacional panameño. La otra vertiente, correspondiente a los intereses del movimiento nacional popular panameño, es la que cuestionó desde un comienzo esa transición precisamente porque vio en ella el medio querido por la oligarquía para la restauración sin trabas de su poder a través de la cancelación de los mecanismos de mediación política y de redistribución del

ingreso creados en su momento más democrático y más revolucionario por el populismo panameño.

Esta segunda vertiente expresa, así, el convidado de piedra en la crisis actual: el movimiento popular, cuya presencia constituye el factor que impide un mero relevo político entre fracciones de la oligarquía como salida a la situación de inestabilidad en que se encuentra el país. Ese movimiento popular no está en condiciones, aún, para imponer sus propios términos de solución a la crisis, pero ha demostrado tener ya una presencia y un peso suficiente como para hacer imposible una solución que no tome en cuenta sus términos que son, de hecho, los de la superación del transitismo como modelo de desarrollo, a través de la demanda de reivindicaciones encaminadas a conquistar las liberaciones políticas necesarias para luchar por la creación de la base material de la democracia nacional y popular a la que aspiran o, mejor aún, aspiramos.

3. De las perspectivas de solución

Si por solución a la crisis se entiende la restauración en Panamá de la normalidad que ella alteró -sea ésta la de los años 70, sea la anterior a 1968-, puede decirse que no existen perspectivas a corto ni largo plazo para ello. Los factores internos y externos mencionados, en efecto, han hecho de la crisis el modo normal de existencia de todas las sociedades latinoamericanas sometidas a la hegemonía del capital transnacional y, por más que lo quiera el localismo de nuestra oligarquía, Panamá no puede ser una excepción. La correlación de fuerzas que se ha gestado en nuestro país impide ya pensar en soluciones que garanticen una situación de estabilidad bajo las formas de dominación existentes, sustentada en el consenso y no en la represión. Pero esa misma correlación hace muy difícil pensar que nuestra sociedad pueda crear una normalidad nueva, popular y democrática, en términos puramente locales.

Lo anterior no quiere decir que la oligarquía panameña carezca de una propuesta de salida a la crisis. Por el contrario, la sociedad panameña viene conociendo el

proceso de formación de un nuevo bloque de poder, en el que las distintas fracciones de la clase dominante tienden a rearticularse en torno al sector financiero, que se ha tornado hegemónico, desplazando al comercial-terratiente de esa posición y confirmando la incapacidad histórica del industrial para ocuparla. De este modo, el discurso que remite la crisis a una disputa entre el gobierno y la oposición oligárquica en torno al ejercicio de los valores cívicos y morales característicos del comercio y la usura, se encubre la realidad de la existencia de un programa común de la oligarquía, cada vez más claro en los hechos. Así, todas las fracciones de la clase dominante están hoy de acuerdo en:

- a) Continuar el pago de la deuda externa para no lesionar aún más sus posibilidades de acceso al financiamiento externo, garantizando la transferencia de los costos sociales y económicos a los sectores populares.
- b) Mantener la política de limitar y cancelar los derechos democráticos de los sectores trabajadores, particularmente en lo relativo a su organización autónoma en lo sindical y lo político-partidario.
- c) Mantener el modelo de desarrollo transitista, incrementando los privilegios a la actividad financiera, comercial y de servicios, y relegando el desarrollo industrial futuro a las actividades de ensamblaje para la reexportación.
- d) Mantener intactas, como corolario de ese modelo de desarrollo, las estructuras agrarias existentes, sobre todo en lo que respecta a la preservación de los grandes latifundios ganaderos, la agroindustria orientada a la exportación y las transnacionales del «agribusiness» como la United Fruit y la Nestlé.
- e) Reducir de manera sistemática el conjunto del aparato estatal a una instancia puramente «administrativa», transfiriendo su patrimonio productivo actual y futuro al ámbito de lo privado -esto es,

lo nacional burgués-, lo cual contempla en particular la «nacionalización» del Canal de Panamá a través de su entrega al sector privado para su administración en asocio con el capital transnacional.

- f) La preservación de la presencia militar norteamericana en el Istmo más allá del año 2000, no sólo como fuente millonaria de ingresos para casatenientes, comerciantes y empresarios del sector servicios, sino además como salvaguarda de la permanencia de la República en el orbe de la cristiandad occidental, y
- g) Obtener y preservar un control político efectivo de las fuerzas armadas, para que garanticen por vía de la represión la viabilidad política de todo lo anterior.

Es aquí, en efecto, donde se sitúa el núcleo verdadero de la disyuntiva aparente entre «militarismo» y «civilismo» con que la oligarquía y el imperialismo han querido caracterizar la crisis panameña. Porque ocurre que esas fuerzas armadas han ganado ya una situación de autonomía política que excede ampliamente los marcos del juridicismo liberal y que resulta ser, en realidad, muy latinoamericana, con lo que estas fuerzas armadas ya no pueden ser simplemente «restauradas» a una función de servidumbre mecánica que hace mucho dejaron de cumplir. Y, sin embargo, ellas son el factor decisivo en la política a cualquier plazo previsible, en la medida en que es ahora que se inicia realmente el desarrollo autónomo del movimiento popular, tras cumplir bajo el populismo y con el estado populista tareas preparatorias que habían estado pendientes por largo tiempo. Así, es este equilibrio de debilitadores -de la oligarquía, por su dependencia supina; del movimiento popular, por su propia crisis de transición- lo que se traduce en la aparente autonomía política del aparato militar nacional, que éste sólo puede preservar a través de la preservación de su institucionalidad frente a los sectores populares -que lo quisieran como un aliado en la lucha contra el capitalismo dependiente- y de su na-

cimiento frente a los sectores oligárquicos -que lo quisieran como un instrumento ciego de represión contra el movimiento popular en su conjunto.

Esta situación de equilibrio inestable, a su vez, satura y refuerza el localismo naturalista de los lenguajes dominantes y contribuyen a dejar por fuera de lo «legítimamente» político en el debate nacional el problema de la vinculación existente entre la suerte de Panamá y su soberanía (no sólo territorial, sino económica, política y cultural) y la lucha de los demás Estados nacionales de América Latina por supervivencia frente a las necesidades del capital transnacional y las políticas de desmantelamiento del Estado-nación que las acompañan. Lo que se oculta así es un dato vital para el movimiento popular panameño: que parece haber pasado la época de las soluciones aisladas, y que nos acercamos a una serie de rupturas en cadena de muchos puntos del sistema imperialista internacional, para las que debemos prepararnos si deseamos realmente encontrar solución a los problemas nacionales.

Hemos llegado, en efecto, a una época inexpresable en los lenguajes que nos imponen la resistencia de las infraestructuras contra las que luchamos, como diría Le Goff: una época, en efecto, en la que el nacionalismo de países como el nuestro solo puede ser popular a condición de ser democrático; solo puede ser democrático a condición de ser revolucionario; solo puede ser revolucionario a condición de ser antiimperialista y solo puede ser antiimperialista a condición de ser internacionalista. No hay ninguna combinación de palabras en el lenguaje del sentido común de expresar esto, ni de decir una verdad tan elemental como la de que únicamente cuando sean canceladas las condiciones de dominación y opresión inherentes al capitalismo dependiente, cesarán las realidades de intervención, corrupción pública y privada y restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores que caracterizan la vida de la inmensa mayor parte de nuestras naciones. Y esto, sin embargo, es la esencia verdadera de lo nacional como hecho real, esto es, como contradicción que se profundiza y se despliega y llama a ser culminada.

Se ha dicho que la gran diferencia entre las tareas que exige la preservación del orden existente y las que requiere su transformación en otro más justo y superior por ello, es que las primeras son en su mayor parte inconscientes mientras que las segundas solo pueden ser eficaces a condición de ser conscientes. Allí apuntaba probablemente José Martí cuando pedía una crítica que fuera «ejercicio del criterio» y luchaba por construir un lenguaje capaz de expresarla. Allí también, en la continuación de esa tarea de construcción siempre inconclusa, hostilizada y amenazada, radica sin duda una de las tareas más importantes que toca cumplir a los intelectuales del nacionalismo panameño: hacer visible lo real, facilitar la expresión de sus propias y verdaderas disyuntivas al movimiento popular, adelantar en la idea la voluntad y los motivos para hacer posible la Nación deseable.

Hoy, en efecto, uno de los factores que prolonga la crisis radica en que el movimiento popular panameño carece de un programa de lucha que sea algo más que la expresión de su negativa a someterse a aquel otro programa en torno al cual se viene produciendo el reagrupamiento estratégico de la oligarquía y el imperialismo. Contar con ese programa, sin embargo, es un elemento decisivo para pasar de la resistencia contra la opresión a la lucha activa contra sus causas. No podemos olvidar que solo la victoria del movimiento popular garantizará realmente aquella condición mínima indispensable para luchar por la identidad nacional, que es la existencia de la Nación. Toca, pues, persistir en la tarea de dotar a la conciencia nueva del lenguaje nuevo que le permita alcanzar aquel momento en que, por la acción de las masas que se guían por ella, la idea se transforma en una fuerza material capaz de alterar el curso de la historia. A ello se refería José Martí cuando pedía echarlo «todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera», en tiempos como éstos, en que los poderosos procuran echarlo todo al hielo -y en primer lugar el arte-, para retrasar cuanto sea posible la llegada de la hora de los hornos.

